

AMERICA LATINA en movimiento

498

septiembre 2014



Frenar el calentamiento global

alai

AMERICA LATINA en movimiento

Edición digital

498

septiembre 2014
año XXXVIII, II época

Foto de portada

Vía Méndez, Villahermosa, México

Huitzil

Fuente: wikimedia.org ©

**Publicación internacional de
análisis y opinión de la Agencia
Latinoamericana de Información**

ISSN No. 1390-1230

Director: Osvaldo León

ALAI: Dirección postal
Casilla 17-12-877, Quito, Ecuador

Sede en Ecuador
Av. 12 de Octubre N18-24 y Patria,
Of. 503, Quito-Ecuador
Telf: (593-2) 2528716 - 2505074
Fax: (593-2) 2505073

URL: <http://alainet.org>

Redacción:
info@alainet.org

Suscripciones y publicidad:
alainetadmin@alainet.org

ALAI es una agencia informativa, sin
fines de lucro, constituida en 1976
en la Provincia de Quebec, Canadá.

Las informaciones contenidas en esta
publicación pueden ser reproducidas
a condición de que se mencione
debidamente la fuente y se haga
llegar una copia a la Redacción.

Las opiniones vertidas en los artícu-
los firmados son de estricta respon-
sabilidad de sus autores y no reflejan
necesariamente el pensamiento de
ALAI.

Suscripción versión impresa (10 números anuales)

	Individual	Institucional
Ecuador*	US\$ 28	US\$ 33
A. Latina	US\$ 60	US\$ 80
Otros países	US\$ 75	US\$ 140

* incluye IVA

Cómo suscribirse:

www.alainet.org/revista.phtml
se aceptan pagos por Internet

- 1 Calentamiento global: agendas enfrentadas
Sally Burch
- 3 Balance y perspectiva en el debate sobre
cambio climático
René Orellana
- 8 Adicción avanzada a los combustibles fósiles
Michael Klare
- 12 Cambio climático y activos tóxicos
Fander Falconí
- 14 Injusticia climática y geoingeniería
Silvia Ribeiro
- 16 REDD: Un mecanismo controversial
Gerardo Honty
- 19 El retorno del movimiento climático de base
al escenario internacional
Jim Shultz
- 22 Entrevista con Meena Raman
Justicia climática: Concientizar, movilizar,
cabildear
ALAI
- 26 Aportes de la CLOC-Vía Campesina:
La agricultura campesina indígena en las
negociaciones de la COP20
CNA-Perú

Calentamiento global: agendas enfrentadas

Sally Burch

En el año 2013, los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera subieron a un nivel sin precedentes, sobre todo por el dióxido de carbono (CO₂), según mediciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicadas en su Boletín anual¹ el pasado 9 de septiembre. La red de Vigilancia de la Atmósfera Global de la OMM encontró que en ese año, la concentración de CO₂ en la atmósfera alcanzó el 142% del nivel de la era preindustrial (o sea, antes de 1750), el de metano el 253% y el de óxido nitroso el 121%.

Según datos preliminares, el aumento súbito de CO₂ podría obedecer a una disminuida capacidad de la biósfera de la Tierra de absorber el gas, sumado al incremento constante de las emisiones. Normalmente, una cuarta parte de las emisiones es absorbida por los océanos, pero ello a su vez tiene graves consecuencias por la mayor acidificación del agua de mar, fenómeno que está sucediendo a un ritmo mayor a lo que ha ocurrido en los últimos 300 años, por lo menos. El estudio concluye que ya no cabe duda alguna que estos cambios se deben a la actividad humana.

Esta conclusión se ratifica también en el informe 2014 del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), que, entre otros aspectos, confirma el deshielo continuo de los polos y glaciares, uno de cuyos principales efectos será la subida del nivel del mar, con graves consecuencias para las zonas costeras bajas, que incluyen grandes ciudades y pequeños países insulares. El informe estima que el riesgo se incrementará desproporcionadamente cuando el calentamiento global supere 1°C y será muy alto, e irreversible, a partir de los 3°C. También

pronostica impactos principalmente negativos en la seguridad alimentaria y los sistemas de producción de alimentos.

Negociación y movilización

Estos datos confirman que, sin acciones contundentes y urgentes, en las próximas décadas el calentamiento global superará los 2 grados centígrados (2°C) por encima de la temperatura mundial promedio de la época preindustrial, considerado ya el límite para evitar una catástrofe planetaria. Desde ya se registra un aumento de 0,8°C. Pero además, demuestran que pelagra la biósfera de los océanos: desaparecerán los arrecifes (que protegen las zonas isleñas) y se trastornará la vida marina.

Sería de esperar, entonces, que estos informes contribuyan a catalizar las respuestas urgentes en términos de políticas efectivas y cambios en los comportamientos de producción y consumo, que la situación exige. No obstante, nada asegura que ello ocurrirá.

Las negociaciones sobre cambio climático avanzan con mucha lentitud y con poca voluntad política de los países con mayor responsabilidad por la situación. La agenda se retomará en Nueva York este 23 de septiembre, donde el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, está organizando una Cumbre del Clima, a la cual ha invitado a jefes de Estado y gobierno, representantes de grandes transnacionales y un grupo reducido de participantes de la sociedad civil. En paralelo, actores sociales han convocado a movilizaciones sociales para “detener y prevenir la Fiebre del Planeta”, incluyendo una marcha masiva por las calles de Manhattan el 21 de septiembre. Uno de los motivos es protestar

¹ <http://bit.ly/1tBFlz9>

por la “captura” del proceso oficial de negociaciones por grandes intereses corporativos.

Luego, del 1 al 12 de diciembre, en Lima, sigue la vigésima edición anual de la Conferencia de las Partes (COP20) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Y del 9 al 12, en la misma ciudad, la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. En Lima se prevé avanzar en la elaboración del borrador del nuevo acuerdo global sobre cambio climático, que entrará en vigencia a partir de 2020, el cual debe aprobarse en la COP21 en París, el año próximo. Recordemos que en 2012 venció el Protocolo de Kioto (PK), sin haber logrado la negociación de un nuevo acuerdo, y se decidió prorrogar el PK hasta 2020, si bien algunos países se retiraron.

Diversas redes de actores sociales movilizadas en torno al cambio climático rechazan las “falsas soluciones” promovidas por sectores empresariales que buscan convertir a la llamada economía verde en un pretexto para el lucro, como mercados de carbono, otras formas de privatización y mercantilización de la vida, geoingeniería, agrocombustibles y agroindustria.

La convocatoria a la movilización en Nueva York² propone remedios para curar y prevenir la “fiebre” que padece el planeta Tierra. Estos

2 <http://bit.ly/1qsSFIJ>

incluyen compromisos obligatorios inmediatos -y no solo promesas voluntarias- de los países para controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero y para mantener el incremento de la temperatura planetaria a no más de 1,5°C. Además, compromisos vinculantes para dejar más del 80% de las reservas conocidas de combustibles fósiles bajo el suelo y prohibir nuevas exploraciones. Plantean también acelerar la transición a energías renovables; promover la producción y consumo locales de bienes durables; estimular la transición a la producción agrícola basada en la comunidad para satisfacer las necesidades alimentarias locales; mejorar el transporte público; crear empleos climáticos para reducir las emisiones y restaurar la naturaleza; y dismantelar la industria bélica.

Luego de las grandes movilizaciones durante la COP15 en Copenhague en 2009, el movimiento climático perdió aliento y los medios de difusión dejaron de interesarse por el tema. Hay signos de que en los próximos meses esta situación puede revertirse. Sin embargo, más allá de que miles de personas se movilicen en las calles o participen en eventos durante unos días, la gravedad de la amenaza requiere de acciones más amplias y sostenidas. Por ejemplo, cómo alimentar un debate público permanente destinado a que amplios sectores de la población se apropien del tema y exijan acciones contundentes, aun sabiendo que pueden significar cambios en su forma de vida. <

Términos y conceptos

Adaptación: ajuste en los sistemas naturales o humanos para minimizar los efectos negativos del cambio climático u optimizar los positivos.

Ambición: voluntad colectiva de fijar y alcanzar las metas de recortes de emisiones.

Mercados de carbono: sistema de comercio a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir reducciones de gases efecto invernadero, traspasando así su responsabilidad.

Mitigación: reducción de los factores causantes del calentamiento global, principalmente los gases de efecto invernadero, sea mediante la reducción de sus fuentes o

el aumento de su almacenamiento.

Partes por millón (ppm): unidad de medida con la que se evalúa la concentración (por ej. de gases en la atmósfera).

Presupuesto de carbono: cálculo de los gases de efecto invernadero que se emitirán desde ahora hasta un año establecido, estableciendo una hoja de ruta planificada para la reducción.

Resiliencia: capacidad de resistencia y adaptación.

REDD: Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y la Degradación de los bosques.

Balance y perspectiva en el debate sobre cambio climático

René Orellana

Después de la COP19 estamos avanzando aún a paso lento en la definición de acuerdos para cerrar la brecha de mitigación climática en el período pre-2020. Una evidencia de ello es que no vemos claridad en el cumplimiento de compromisos relacionados con el segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto.

No existen claras señales para reducir la brecha de carbono y la ruta a una temperatura menor a 2°C no está siendo garantizada. Requerimos para ello mayor ambición en mitigación, pero también requerimos que se orienten en dos direcciones: una distribución equitativa del presupuesto de carbono disponible y medidas basadas en reglas estrictas para la mitigación. El último informe del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) nos da ya señales claras sobre el presupuesto de carbono máximo para no superar los 2°C.

Debemos empezar a discutir sobre cómo distribuir el presupuesto disponible conforme a criterios de responsabilidad histórica, población, pobreza, circunstancias nacionales, capacidades técnicas y tecnológicas. Por supuesto esto debe enmarcarse en el cambio de visiones y modelos de desarrollo orientándolos a la armonía con la naturaleza y al vivir bien. Una distribución semejante requiere decisiones multilaterales.

Por otra parte seguimos observando cierta reticencia en algunas delegaciones de países desarrollados a asumir la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como la norma en función de la cual se deben construir las contribuciones de países desarrollados y de países en desarrollo,

esto implica respetar y aplicar los principios y provisiones de la Convención.

La agenda de Bolivia

Bolivia definió una agenda compleja con temas centrales que se relacionan con mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia de tecnología, consolidación del marco institucional construido para apoyar a países en desarrollo, establecimiento de un instrumento legal que garantice el cumplimiento de las obligaciones de países desarrollados en cuanto a la realización de acciones efectivas de reducción de emisiones con compromisos cuantificados, en fin.

Estos temas están relacionados con el objetivo de lograr soluciones estructurales y sostenibles a la crisis climática.

De manera resumida, los temas cruciales que se ha planteado Bolivia fueron los siguientes:

- a) Avanzar en la construcción de una estructura y la definición del alcance del nuevo instrumento legal de cambio climático que regirá desde 2020 y deberá estar plenamente aprobado en 2015. Este instrumento debe ser integral y debe incorporar disposiciones específicas en cuanto al cumplimiento de la obligación de los países desarrollados de proveer recursos financieros y transferir tecnologías a los países en desarrollo para acciones de mitigación y adaptación.
- b) Avanzar en la incorporación de una visión distinta de desarrollo que incorpore a la madre tierra, la armonía con la naturaleza y el vivir bien articulados al derecho

al desarrollo y la equidad como principios junto a la llamada Responsabilidad Común pero Diferenciada. Es importante destacar que en la decisión aprobada en la COP18 en Qatar hemos logrado, por primera vez, incluir la mención a los conceptos/principios de Madre Tierra junto a equidad y derecho al desarrollo. Este logro como marco conceptual y principista está ya incluido en el documento final de la Conferencia de Desarrollo Sostenible Rio+20 realizada en 2012 en Brasil y en la introducción a las propuestas de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Grupo de Trabajo Abierto de NNUU sobre los ODS.

- c) Garantizar la provisión de recursos financieros para el funcionamiento de la institucionalidad de cambio climático que hoy agoniza por la falta de financiamiento. Nos referimos al Comité de Adaptación, al Comité de Tecnología y la Red de Tecnología, al Fondo Verde del Clima, en fin. Esto es fundamental dado que existe una tendencia a privatizar el financiamiento evitando las obligaciones de los países desarrollados con la intención de convertir el régimen legal e institucional internacional climático en un mercado de tecnologías, mercado de carbono y en una oportunidad de negocios, créditos, en fin.
- d) Lograr avances sustanciales en la aprobación de un programa de acción inmediata que incluya acciones de mitigación, compromisos ambiciosos de mitigación de los países desarrollados (quienes tienen la obligación de tomar el liderazgo en este tema) y compromisos de provisión de recursos y apoyo técnico para acciones de adaptación, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
- e) Avanzar consistentemente en la consolidación del Mecanismo Internacional de Daños y Pérdidas, la consolidación del Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación en el marco de la gestión y la inclusión de una

nueva herramienta planteada por Bolivia en la sesión de junio de 2014 de la CM-NUCC: el Mecanismo de Resiliencia Climática y Desarrollo Sostenible.

Tenemos aún mucho camino que recorrer en esta agenda.

Un tema sensible en la agenda de cambio climático: Mercados de Carbono

Nuestras críticas a los mercados de carbono se fundamentan en el peligro de la doble contabilidad de reducciones de emisiones que pueden implicar los mercados, la legalización de mercados negros de carbono (armados por quienes no entraron en el 2do período de compromisos del Protocolo de Kioto, precisamente para evitar la legalidad y la institucionalidad del protocolo) sin certidumbre de una institucionalidad y una regulación que nos garantice que los mercados no terminen más bien encubriendo mayores emisiones.

Nos preocupa la obsesión y también la intransigencia de crear mercados nuevos sin que siquiera hayamos acordado y aprobado el nuevo instrumento legal que sustituirá al Protocolo de Kioto y que tendrá una estructura completa con instituciones, normas, reglas de contabilidad, sistemas de compromisos, arreglos institucionales, sistemas de obligaciones, sistemas de monitoreo y control de acciones de mitigación, mecanismos y sistemas de control de la provisión de medios de implementación (financiamiento y tecnología), etc.

¿Por qué se apuran tanto en crear y constituir de inmediato nuevos mecanismos de mercado sin que hayamos terminado de diseñar el nuevo instrumento legal a ser aprobado en diciembre de 2015, tal como está acordado? ¿No será ésta más bien la intransigencia en lugar de las propuestas y posiciones que piden que este tema sea tratado de manera integral en el marco del nuevo instrumento legal?

Tenemos preocupaciones de fondo con res-

pecto a los nuevos mecanismos de mercado de carbono y al enfoque con el que pretendan crearse. Cuando leemos con cuidado los documentos de propuestas de algunos países desarrollados, sobre nuevos mecanismos de mercado, la conclusión a la que llegamos es que éstos apuntan en el largo plazo:

- A evitar la responsabilidad doméstica de reducción de emisiones en los países desarrollados y transferirla a través de OFFSETS (compensaciones) a países en desarrollo.
- A generar oportunidades de negocios que asocien mercados de carbono con mercados de tecnologías de mitigación.
- A transferir las fuentes de financiamiento a los mercados, de tal modo que ya no sean los fondos públicos de países desarrollados los que provean los recursos financieros, sino que las fuentes “legalmente” establecidas sean los mercados. La consecuencia de largo plazo es que el país que no se incorpore a redes de mercados de carbono no cuenta con financiamiento para mitigación y adaptación.
- A reducir, y en el largo plazo, eliminar el peso de la responsabilidad de provisión de medios de implementación (financiamiento y tecnología) de parte de países desarrollados y transferirlos a países en desarrollo.
- A promover la construcción nacional de marcos legales e institucionales habilitantes y facilitadores de inversiones en mercados de carbono, tecnologías de mitigación e inversiones en mitigación de parte de capitales interesados en esos rubros.

Esto último tiene graves implicaciones porque apunta a crear un sistema de monitoreo no sólo de nuestras acciones de mitigación sino incluso de nuestros sistemas legales de inversiones y comercio, así como de nuestros acuerdos y tratados de inversiones, de tal modo que para articular un país a mercados de carbono primero se examine su grado de

apertura a inversiones y mercados. Esto que parece una obsesión no lo es; Bolivia precisamente observó esa intención expresada en el párrafo 6 de la decisión de la COP19 sobre el programa de financiamiento de largo plazo porque apuntaba a esa dirección.

Es francamente preocupante que se quiera usar mecanismos de financiamiento y de mercados de carbono como Caballos de Troya para crear lo que no se pudo por la vía de acuerdos de libre comercio, abriendo las puertas de todas las inversiones que pudieran relacionarse directa o indirectamente con mitigación o adaptación climática.

Estas son algunas de las razones por las que Bolivia pone un freno a una agenda de mercados con estas connotaciones aún a riesgo de ser visto como intransigente y tener mala fama.

Por lo demás, es pertinente y adecuado que toda discusión sobre mercados de carbono - discusión en la que Bolivia está dispuesta a embarcarse con sus propios argumentos técnicos y también políticos (porque ésta es, nos guste o no, una agenda política y una agenda de desarrollo)- se haga en el marco del diseño de un nuevo instrumento legal, y no se pretenda crear nuevos mecanismos de un plumazo, al margen y en paralelo a un instrumento legal que debe ser integral.

Problemas pendientes

Entre los temas pendientes de solución y que aún constituyen problemas en la aplicación de la CMNUCC se encuentran los siguientes:

1. Debilitamiento progresivo de las entidades de gestión del cambio climático correspondientes a Naciones Unidas debido a la carencia de financiamiento.
2. Debilitamiento de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados, lo cual va acompañado de una campaña persistente

y vigorosa para que los países en desarrollo, en particular los países no emergentes, comprometan contribuciones de mitigación, sin contar con la seguridad de transferencia de financiamiento, tecnología y desarrollo de capacidades.

3. Ausencia de cumplimiento del compromiso de provisión de financiamiento de parte de los países desarrollados para que los países en desarrollo realicen acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

El presupuesto de Carbono

Debemos abrir un debate sobre la distribución del presupuesto de carbono para el periodo 2015-2100, basados en la información del último reporte del IPCC, en el marco de un reconocimiento conjunto de que las emisiones deben seguir una curva descendente que permita al planeta no superar los 2°C lo cual nos exige disminuir las emisiones drásticamente antes de 2020, para lo cual se requieren compromisos ambiciosos en particular de los países desarrollados de quienes esperamos tomen el liderazgo.

La curva de emisiones debería empezar a bajar de las más de 46 GtCO₂ (gigatoneladas de dióxido de carbono) anuales a cerca de 40 GtCO₂ hacia 2020. No deberíamos esperar acciones posteriores a ese año. Ciertamente esto supone que la distribución de las obligaciones se haga también considerando el derecho al desarrollo de países en desarrollo, derecho que debe implicar construir sociedades equitativas, erradicar la pobreza, redistribuir la riqueza, erradicar el hambre, garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y la integridad de la madre tierra.

El presupuesto máximo para no superar los 2°C hasta 2050 está en el rango de 925 GtCO₂ a 1020 GtCO₂. Debemos discutir cómo aplicar el principio de equidad y el de acceso equitativo al desarrollo sostenible a este presupuesto.

Presupuesto de Carbono (GtCO ₂)		
Escenario ppm	Probabilidad para no superar 2°C	Periodo 2011-2050 Emisiones Acumuladas (Promedio GtCO ₂)
450	Más probable que sí	925
Cerca pero no mayor a 500	Más probable que no	1020
Mayor a 500	Igualmente probable que no	1330

Elaboración: Diego Pacheco y René Orellana

Pero al tiempo de discutir cómo distribuir las emisiones, debemos igualmente discutir cómo reducir las emisiones, así como qué instrumentos y qué criterios deben regir las acciones de reducción de emisiones.

Algunas delegaciones de países desarrollados insisten en obviar los principios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible con el argumento de que el mundo ha cambiado y que no se puede hablar de responsabilidades diferenciadas. Una corriente política vigorosa en los escenarios de debate de la CMNUCC promueve la uniformización de compromisos, lo cual tiene como implicación inmediata el desmontaje de obligaciones por ejemplo de provisión de medios de implementación a los países en desarrollo.

Precisamente estas corrientes promueven herramientas como los mercados de carbono asumiendo que son los mecanismos eficaces para la mitigación climática, cuestión que Bolivia, como lo hemos afirmado, no comparte y objeta con argumentos técnicos y no sólo políticos.

Es evidente, igualmente, que algunas delegaciones de países en desarrollo comparten estos criterios, y aquí precisamente Bolivia ha hecho una invitación a reflexionar y construir

conjuntamente posiciones que permitan posiciones comunes, por ejemplo que condicionen la discusión sobre la adopción inmediata de mecanismos de mercado a la discusión primero y por sobre todo de acuerdos efectivos de reducción de emisiones en el marco de contribuciones y obligaciones con un sistema de reglas y normas, así como regulaciones relacionadas con la contabilidad de mitigación. En otras palabras, primero se debe concluir la construcción del nuevo instrumento legal.

Es igualmente motivo de debate que se planteen insistentemente soluciones tecnológicas de cuestionable eficacia y de dudoso impacto ambiental como las tecnologías de geoingeniería que conllevan dudas fundamentadas sobre el daño que pueden causar a la naturaleza y a los seres humanos. Requerimos ciertamente innovadoras soluciones tecnológicas para contribuir a la solución a la crisis climática, pero debemos hacerlo siempre en el marco de la integridad ambiental.

El uso masivo de recursos bioenergéticos y su impacto en la disponibilidad de alimentos, en los precios de éstos, así como en la disponibilidad de la tierra y el uso intensivo y degradante de ésta, constituyen otros temas que nos preocupa y lo hemos expresado incluso de manera muy constructiva como crítica a los amigos y aliados de países en desarrollo. Requerimos una discusión de estos temas no sólo en el marco del debate de mitigación climática sino también en el marco del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

En síntesis, los temas de distribución de presupuesto de carbono y la definición de los medios y herramientas más adecuadas para contribuir a la solución a la crisis climática deben pasar igualmente por un cambio de visión de desarrollo y por un debate sobre la necesidad de no mercantilizar las funciones ambientales y promover más bien el cumplimiento de obligaciones y la contribución de todos los países del mundo a soluciones de fondo pero reconociendo las diferencias y las responsabilidades actuales e históricas que los países tienen. ☞

Propuestas para países desarrollados	Propuestas de Bolivia
Eliminación de los principios de Responsabilidad Común pero Diferenciada y de la Responsabilidad Histórica	Responsabilidad Histórica Responsabilidad Común pero Diferenciada
Universalización - Uniformización	Diferenciación Equidad en la distribución de obligaciones
Mercados de Carbono (Nuevo Mecanismo de Mercado)	Reducciones domésticas sin mercados de carbono
Tecnologías de Geoingeniería, Captura y Almacenaje de Carbono	Tecnología ambientalmente amigable
Bioenergía Masiva	No uso de alimentos para energía
Eliminación acelerada de combustibles fósiles	Proceso gradual en función de transferencia de financiamiento y tecnología

Elaboración: Diego Pacheco y René Orellana

René Orellana, doctor en sociología, fue Ministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia; Jefe de Delegación de Bolivia en la Conferencia de Rio+20 y las Conferencias de Cambio Climático (COP17, 18 y 19). Fue miembro del Grupo de Trabajo Abierto de NNUU para la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Coordinador del Área de Medio Ambiente de la Universidad Cordillera.

Adicción avanzada a los combustibles fósiles

Michael Klare

En un artículo publicado en TomDispatch¹, Michael Klare compara la dependencia mundial de los combustibles fósiles con la adicción a las drogas. Si bien la analogía no es nueva (recuerda que el propio George W. Bush declaró en 2006 que “América es adicta al petróleo”), pocos analistas han extendido esta analogía para explorar cómo “nuestra creciente dependencia del petróleo genera comportamientos cada vez más erráticos y autodestructivos”, como el “pensamiento delirante” típico con un grado avanzado de adicción. Como ejemplo, Klare cita a responsables políticos y periodistas normalmente confiables, cuando argumentan que el aumento de la producción energética en Estados Unidos (gracias al fracking) le permitirá a ese país asumir actitudes de “bravucón”, para ganar influencia en el ámbito de las relaciones internacionales. El planeta necesita una desintoxicación urgente, argumenta en el artículo, del cual recogemos aquí extractos.

La evidencia más convincente de que la adicción a los combustibles fósiles ha llegado a una etapa crítica se encuentra en los datos oficiales de Estados Unidos sobre las emisiones de dióxido de carbono. El mundo ahora emite 150% más dióxido de carbono de lo que era el caso en 1988, cuando James Hansen, entonces director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, advirtió al Congreso que el planeta se estaba calentando como consecuencia del “efecto invernadero”, y que la

actividad humana -principalmente en la forma de emisiones de carbono provenientes del consumo de combustibles fósiles- era la causa más probable.

Si una preocupación razonable por el destino del planeta primara sobre nuestra dependencia de los combustibles fósiles, podríamos esperar encontrar, sino una reducción en las emisiones de carbono, cuando menos una disminución en la tasa de aumento de las emisiones, en el transcurso del tiempo. En lugar de eso, la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) prevé que las emisiones globales seguirán aumentando a un ritmo intenso durante el próximo cuarto de siglo, llegando a 45,5 mil millones de toneladas métricas en el año 2040 -más del doble del volumen registrado en 1998, cuyo efecto, según una mayoría de científicos, bastaría para convertir nuestro planeta en un infierno-. Si bien rara vez se lo reconoce como tal, ésta es la definición de la **auto-destrucción inducida por la adicción**.

Para muchos de nosotros, la adicción al petróleo está incrustada en nuestra vida cotidiana en diversas formas, sobre las que ejercemos poco control. Por ejemplo, debido al desmantelamiento sistemático del transporte público y su desfinanciamiento (junto con la colosal subvención de carreteras), hemos desarrollado (en EE.UU.) una alta dependencia de vehículos propulsados por petróleo, y es muy difícil para la mayoría de quienes vivimos fuera de las grandes ciudades imaginar una alterna-

1 Carbon Delirium http://www.tomdispatch.com/blog/175825/tomgram%3A_michael_klare%2C_shooting_up_on_big_energy, April 2014.

Michael T. Klare es profesor de estudios sobre la paz y la seguridad mundial en Hampshire College y autor, recientemente, de *The Race for What's Left*.

tiva práctica a conducir un auto. Cada vez más personas, es cierto, tratan de dejar este hábito a nivel individual, al adquirir vehículos híbridos o totalmente eléctricos, mediante el uso de transporte público cuando sea posible, o con el ciclismo, pero que sigue siendo una gota en el océano. Se necesitará a futuro un esfuerzo monumental para reconstruir nuestro sistema de transporte para que sea amigable con el clima.

Para el equivalente a lo que podríamos considerar cómo el 1% en el ámbito de la *Big Energy*, la adicción a los combustibles fósiles se deriva de la fiebre de la riqueza y el poder: algo que es mucho más difícil de resistir o deconstruir. El petróleo es el producto más lucrativo del planeta y representa una fuente enorme de riqueza e influencia para los grupos dominantes de los países que lo producen, sobre todo Irán, Irak, Kuwait, Nigeria, Rusia, Arabia Saudita, Venezuela, los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. No es que todos los líderes de estos “petro-estados” sacan beneficio personal de la acumulación de los ingresos del petróleo, pero sin duda alguna reconocen que su capacidad de gobernar o de permanecer en el poder se apoya en su capacidad de respuesta frente a intereses energéticos fuertemente establecidos, como en su habilidad para destinar los recursos energéticos de la nación para ganar ventaja política y estratégica. Esto es igualmente cierto para Barack Obama, quien ha secundado la cruzada de la industria energética a favor de incrementar la producción doméstica de petróleo y gas, como lo es para Vladimir Putin, quien ha tratado de ampliar la influencia internacional de Rusia mediante un aumento de las exportaciones de combustibles fósiles.

Altos funcionarios de estos países saben mejor que la mayoría de nosotros que el cambio climático severo se nos viene encima, y que sólo una fuerte reducción de las emisiones de carbono puede prevenir sus efectos más destructivos. Sin embargo, los funcionarios de gobiernos y corporaciones están tan atados a los beneficios de los combustibles fósiles -o a las ventajas políticas que se derivan de con-

trolar el flujo de petróleo- que son totalmente incapaces de superar sus ansias de alcanzar cada vez mayores niveles de producción. Como resultado, si bien el presidente Obama habla a menudo de su deseo de aumentar la dependencia de la nación frente a la energía renovable, en la práctica ha adoptado un plan energético en todos los frentes que garantiza un aumento en la producción de petróleo y gas. Algo similar se aplica a casi todas las demás figuras importantes del gobierno. Periódicamente rinden homenaje a la necesidad de aumentar la tecnología verde, pero siguen dando prioridad a una mayor producción de petróleo, gas y carbón mineral. Hasta 2040, de acuerdo con las predicciones de la EIA, estos combustibles podrían todavía suministrar las cuatro quintas partes de la oferta total de energía del mundo.

Este sesgo a favor de los combustibles fósiles sobre otras formas de energía -no obstante todo lo que sabemos sobre el cambio climático- sólo puede entenderse como una especie de delirio del carbono. La evidencia de esta patología se encuentra en todo el mundo y de mil maneras, pero aquí hay tres ejemplos inequívocos de nuestra etapa avanzada de adicción.

1. La decisión de la administración Obama de permitir que BP reanude la perforación petrolera en el Golfo de México.

Luego de que el gigante energético BP (antes British Petroleum) se declara culpable de negligencia criminal en el desastre de la plataforma Deepwater Horizon de abril de 2010, que dejó un saldo de 11 personas muertas y un colosal derrame de petróleo, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) suspendió el derecho de la empresa a adquirir nuevos permisos de perforación en el Golfo de México. La prohibición fue ampliamente vista como un importante revés para la empresa, que durante mucho tiempo había tratado de dominar la producción en aguas profundas del Golfo. Para recuperar el acceso al Golfo, BP demandó a la EPA y aplicó otras formas de presión para influir en el gobierno de Obama. Final-

mente, el 13 de marzo, después de meses de cabildeo y negociaciones, la Agencia anunció que a BP se le permitiría reanudar la licitación de nuevos convenios de arrendamiento, siempre y cuando se adhiera a una lista de restricciones supuestamente estrictas.

Los funcionarios de BP consideraron el anuncio como una gran victoria, que permitiría a la empresa reanudar la frenética búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo en aguas profundas del Golfo. “El acuerdo de hoy permitirá al inversor más grande de América a competir de nuevo por contratos y arrendamientos federales”, dijo el presidente de BP America, John Mingé. Varios observadores de la industria del petróleo prevén que la compañía adquirirá ahora muchos convenios adicionales de arrendamiento en el Golfo, o que incrementará su ya sustancial presencia en la zona. “Con este acuerdo, es realista esperar que el Golfo de México puede ser un activo clave para las operaciones de BP no sólo para la presente década, sino potencialmente para las décadas venideras”, comentó Stephen Simko, un especialista en petróleo de la empresa de analistas de inversiones Morningstar.

El interés de BP, entonces, está bastante claro; pero ¿cuál es el interés nacional en todo esto? Por cierto, el presidente Obama puede afirmar que el aumento de la perforación podría agregar unos pocos cientos de miles de barriles diarios a la producción nacional de petróleo, además de unos pocos miles de nuevos puestos de trabajo. Pero, ¿será que realmente el presidente pueda asegurar a nuestros hijos o nietos que, al permitir el aumento de la perforación en el Golfo, está haciendo todo lo posible para reducir la amenaza del cambio climático, como prometió hacerlo en su último discurso del Estado de la Unión?

2. La ofensiva republicana para promover la construcción del oleoducto Keystone XL, como una respuesta a la crisis en Ucrania

Si la administración Obama sueña ilusamente en poder presionar a Putin gracias a la exportación

de gas natural líquido (GNL) a Europa², la respectiva ofensiva impulsada por ciertos republicanos clave, para lograr la aprobación del oleoducto Keystone XL desde las arenas bituminosas, pone de cabeza cualquier noción de sensatez. Keystone, como se recordará, es concebido para transportar bitumen diluido, denso en carbono y altamente corrosivo, de las arenas de alquitrán de Athabasca, en Alberta, Canadá, a refinerías de la Costa del Golfo. Su construcción se ha retrasado debido a preocupaciones por la amenaza que plantea para las fuentes de agua que se encuentran a lo largo de su trayecto y por lo que ayudará a aumentar las emisiones globales de dióxido de carbono.

Debido a que Keystone atraviesa una frontera internacional, su construcción debe recibir la aprobación, no sólo del Departamento de Estado, sino del propio Presidente. Los republicanos y sus aliados conservadores desde hace mucho tiempo defienden el oleoducto, como un repudio a lo que consideran la excesiva deferencia gubernamental ante las preocupaciones ambientales. Ahora, en medio de la crisis de Ucrania, de pronto presentan la eventual aprobación del oleoducto como una señal de la decisión estadounidense de resistir los movimientos agresivos de Putin en Crimea y Ucrania.

¿Alguien realmente cree que Vladimir Putin se dejaría influenciar por un anuncio de la Casa Blanca de que permitirá la construcción del oleoducto Keystone XL? El gobierno de Putin ya se enfrenta a sanciones económicas significativas y otras maniobras punitivas, pero nada de esto le ha impedido perseguir lo que él parece creer son los intereses fundamentales de Rusia. ¿Por qué, entonces, tomaría siquiera en consideración la eventualidad de que EE.UU. adquirirá una mayor parte de su petróleo de Canadá y menos de México, Nigeria, Venezuela, y otros proveedores extranjeros?

2 Ver: “U.S. Hopes Boom in Natural Gas Can Curb Putin”, *New York Times*, 05/03/2014, <http://nyti.ms/1fomAXa>

Además, sugerir que la aprobación de Keystone XL de alguna manera reforzaría la resolución de Obama y le inspiraría a adoptar medidas más duras contra Moscú, es incurrir en lo que los psicólogos llaman “pensamiento mágico”. Si Keystone transportara cualquier otra sustancia que el petróleo, resultaría risible la afirmación de que su construcción afectaría de alguna manera la toma de decisiones presidencial o los acontecimientos en las fronteras de Rusia. Sin embargo, tan grande es nuestra veneración por el petróleo, que terminamos por creer en tales milagros. Ésta es otra expresión del delirio del carbono.

3. El caso de los \$ 20 mil millones esfumados

Por último, consideremos la desaparición de \$ 20 mil millones en ingresos petroleros del tesoro nigeriano. En Nigeria, donde el ingreso promedio es de menos de \$ 2.00 por día y muchos millones de personas viven en la pobreza extrema, la desaparición de esa cantidad de dinero es un motivo de extrema preocupación. Si se utilizaran para el bien público, esos 20 mil millones dólares podrían haber proporcionado educación básica y atención de salud para millones de personas; podían ayudar a aliviar la epidemia del SIDA y a impulsar el desarrollo en las zonas rurales pobres. Pero con toda probabilidad, la mayor parte de ese dinero ya se ha encaminado a las cuentas bancarias en el extranjero de funcionarios nigerianos bien conectados.

La desaparición fue revelada por primera vez en febrero, cuando el gobernador del Banco Central de Nigeria, Lamido Sanusi, dijo a una comisión de investigación parlamentaria que la Corporación Nacional Nigeriana de Petróleo (NNPC) no había cumplido con la transferencia del producto de las ventas de petróleo al tesoro nacional, como lo requiere la ley. Nigeria es el principal productor de petróleo de África y los ingresos de su producción petrolera no reclamados por los socios extranjeros de la NNPC deben depositarse en las arcas del Estado. Con precios del petróleo en torno a los \$ 100 por barril, teóricamente Nigeria de-

bería acumular decenas de miles de millones de dólares por año a partir de las ventas de exportación. Sanusi fue despedido de inmediato por el presidente Goodluck Jonathan por transmitir la noticia de que la NNPC había estado reportando al Banco Central ingresos sospechosamente bajos por el petróleo, privando al Estado de ingresos vitales y amenazando la estabilidad de la moneda de la nación. La única explicación plausible, opinó, es que los funcionarios de la compañía estarían desviando la diferencia. “Una cantidad sustancial de dinero se ha ido”, declaró al *New York Times*. “Yo no estaba hablando sólo de números. Demostré que se trataba de una estafa”.

Si bien la magnitud del desfaldo llama la atención, su existencia no es de extrañar. Desde que Nigeria comenzó a producir petróleo hace unos 60 años, un pequeño grupo de oligarcas empresariales y gubernamentales ha controlado la asignación de los ingresos petroleros, usándolos para comprar clientelas políticas y asegurar sus propias fortunas privadas. La NNPC ha sido un lugar especialmente fértil para la corrupción, ya que sus operaciones son en gran parte inmunes a la inspección pública y las oportunidades de estafas son gigantes.

Aquí, entonces, vemos otra forma, igualmente flagrante, del delirio del carbono: la adicción a la riqueza petrolera ilícita, tan profunda como para colocar la solvencia y el bienestar de 175 millones de personas en situación de riesgo. El presidente Jonathan ahora ha prometido investigar las acusaciones de Sanusi, pero es poco probable que una porción significativa de los \$ 20 mil millones faltantes vuelva algún día a la tesorería de Nigeria.

Curar la adicción

Estos ejemplos del delirio del carbono indican cuán profundamente está arraigado en la cultura global. En EE.UU., la adicción al carbono está presente en todos los niveles de la sociedad; pero más alto se sube en los círculos empresariales y gubernamentales, más avanzado está el proceso.

Sólo será posible disminuir el ritmo del cambio climático una vez que esta aflicción se identifique, se trate y se neutralice. La superación de la adicción individual a sustancias estupefacientes nunca es una tarea fácil; resistir a nuestra adicción al carbono no resultará más fácil. Sin embargo, cuanto antes replanteemos la problemática climática como un problema de salud pública, similar a la adicción a las drogas, más pronto seremos capaces de forjar estrategias efectivas para evitar sus peores efectos. Ello significa, por ejemplo, proporcionar programas e incentivos para quienes busquemos reducir nuestra dependencia del petróleo, e imponer sanciones a quienes se resisten a esa transición o activamente promuevan la adicción a los combustibles fósiles.

La desinversión de las acciones en combustibles fósiles sería, sin duda, una manera de parar la adicción en seco. Implicaría sacrificar expectativas de futuras recompensas de la posesión de dichas acciones, a la vez que privaría a las empresas de combustibles fósiles de nuestros fondos de inversión y, por ende, de nuestro consentimiento para sus actividades.

Pero una forma de desintoxicación del carbono de más largo alcance debe llegar con el tiempo. Al igual que con todas las adicciones, el primer paso, y el más importante, es reconocer que nuestra adicción a los combustibles fósiles ha llegado a una etapa tan avanzada como para representar un peligro directo para toda la humanidad. (Traducción ALAI) <>

Cambio climático y activos tóxicos

Fander Falconí

Los activos de las empresas petroleras poseen un efecto tóxico. Efectivamente, el comportamiento irracional de los mercados se ha movido a la industria de las energías no renovables (petróleo, gas y carbón), dice con mucho acierto un artículo de Ambrose Evans-Pritchard¹ publicado en *The Telegraph*.

Recordemos que, en forma previa, a la gran crisis del capitalismo central del año 2008, los bancos crearon las llamadas burbujas financieras, cuando otorgaron grandes préstamos a personas con poca probabilidad de repago. Los bancos norteamericanos, para ampliar el mercado, crearon las hipotecas de alto riesgo, conocidas como opciones “subprime”, con el respaldo de la *Community Reinvestment Act*, que es una ley que obligaba a los bancos a prestar a personas que no tenían buen historial crediticio. El riesgo fue eludido en forma sistemática, lo cual amplió la demanda de bienes inmuebles e incrementó el precio de las casas. Fue ésta la causa para que la burbuja inmobiliaria, tanto en Estados Unidos como en Europa, se disparara.

Ahora, aparecen otros activos tóxicos. Estos se originan en las enormes inversiones de las empresas petroleras relacionados con los crecientes costos debido a que ya se habría alcanzado la tasa máxima de extracción de petróleo global y por lo tanto estaríamos en un declive de los yacimientos hidrocarbúricos.

1 <http://bit.ly/1xWC9RY>

A este pico petrolero (o cénit) se suma otro factor: la imposibilidad de extraer todas las reservas petroleras a futuro por los graves impactos ambientales que provocaría la quema de combustibles fósiles.

Ya en las tres últimas décadas se han encendido las alertas acerca de lo que sucede en el mundo, debido a las manifestaciones evidentes de los fenómenos naturales como expresiones del cambio climático. Las investigaciones científicas, en torno a las transformaciones ambientales y sus causas, cobraron importancia por cuanto éstas son los medios idóneos para comprender el proceso de evolución del comportamiento del planeta, y determinar el grado de injerencia y responsabilidad que tienen las sociedades humanas respecto al tema que tratamos.

La información que ahora disponemos es decisiva y nos permite partir de una constatación basada en la realidad y no en una mera especulación. Por primera vez en la historia humana, la concentración de dióxido de carbono (CO₂) –uno de los principales gases que provocan el efecto invernadero– en la atmósfera superó ya para siempre o para muchísimos años, la frontera de las 400 partes por millón. Eso fue anunciado el 9 de mayo de 2013, desde Mauna Loa, en Hawái, la estación más antigua de medida de CO₂ desde que comenzó a operar en 1958. Cuando se inició el estudio del fenómeno, hacia 1900, la concentración era de 300 partes por millón (ppm). De acuerdo con los registros de medición, ahora aumenta 2 ppm cada año. Los datos con los que contamos y el criterio de los científicos, han alertado ya sobre las impredecibles consecuencias climáticas que tendría en nuestro planeta, si se produjese una cantidad de CO₂ superior a los 450 ppm.²

Sobre la base de la información de la Agencia Internacional de Energía, Evans-Pritchard dice

2 Hay un consenso científico de que un aumento de más de dos grados centígrados a la temperatura promedio planetaria –por la excesiva quema de combustibles fósiles y la consiguiente emisión de dióxido de carbono, el gas que más contribuye al calentamiento global– sería catastrófico para la humanidad. Ese es el umbral.

que las inversiones globales en oferta de energía fósil se han duplicado, en términos reales, en el periodo 2000-2008, hasta alcanzar los 900 billones de dólares (un billón equivale a mil millones). En el 2013, las inversiones llegaron a los 950 billones de dólares. Las inversiones fuertes están en las fases de la exploración y extracción de petróleo y gas.

La revista *The Economist* publicó un artículo en el 2013, haciéndose eco de la investigación realizada por la organización Carbon Tracker y del Instituto Grantham de la London School of Economics, en el que asegura que la cantidad de dióxido de carbono que puede ponerse en la atmósfera (si no excedemos en dos grados de aumento a la temperatura del planeta en relación con los niveles pre industriales) es nueve veces menor que la que produciría al quemarse las reservas de carbón, gas y petróleo ya declaradas por empresas privadas o estatales. La implicación de esta investigación es que las empresas petroleras cargan de por sí unos activos tóxicos contables, y por ende los balances financieros están cuestionados.

En tal virtud, nos enfrentamos con varios problemas futuros: un pico petrolero que requiere altas inversiones por los costos crecientes de extracción, pero a su vez la imposibilidad de sacar todas las reservas, a menos que colapsemos como humanidad. Los intereses que están en juego son enormes. Si hay algún tope para micropartículas en la atmósfera, a fin de no pasar el fatídico umbral de los 2 grados centígrados, la industria de la energía fósil podría perder nada menos que 28 trillones (millones de millones) de dólares de ganancias brutas en las próximas dos décadas, según el artículo de *The Telegraph*.

“Sólo la dosis hace al veneno”, decía Paracelso. Parecería que acumulamos una dosis tóxica civilizatoria, cuyos resultados perniciosos podrían observarse en el mediano y largo plazos. ☞

Fander Falconí es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Injusticia climática y geoingeniería

Silvia Ribeiro

Ante los informes que muestran el creciente caos climático, los promotores de la geoingeniería -la manipulación intencional del clima a escala planetaria- redoblan sus propuestas y han logrado incluso entrar en ámbitos globales de referencia, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Intentan además revertir la moratoria contra la geoingeniería que existe en Naciones Unidas en el Convenio de Diversidad Biológica y legitimar técnicas de geoingeniería en las negociaciones de cambio climático.

Es grave, ya que además de no hacer absolutamente nada para detener el cambio climático, las propuestas de geoingeniería conllevan enormes riesgos, inequitativamente repartidos entre regiones. La mayoría de los impactos de tales técnicas afectarán sobre todo a países del Sur global que no han provocado el cambio climático y que probablemente ni siquiera sabrán que el aumento de desequilibrios climáticos será causado por la manipulación del clima.

Varios estudios científicos recientes muestran que los impactos de la geoingeniería serían peores para algunas regiones. Si se realizara el proyecto de crear una mega nube volcánica artificial sobre el Ártico, para bloquear los rayos solares y supuestamente bajar la temperatura en el hemisferio Norte, se desequilibraría el ciclo hidrológico en los trópicos y subtrópicos, con aumentos o disminución de lluvias. Tendría efectos catastróficos en selvas tropicales, principalmente en Asia y Amazonía, y por incremento de sequías en África. (A. Ferraro *et al*, *Environmental Research Letters*, 2014).

Otros estudios científicos publicados en 2013 (proyecto GeoMIP, con decenas de científicos

y países participantes), basados en investigación con modelos matemáticos, señalan impactos graves de diferentes propuestas de geoingeniería. Desde 2008, el meteorólogo Alan Robock, indicó que colocar nubes volcánicas artificiales tendría efectos colaterales sobre los patrones de precipitación, poniendo en riesgo las fuentes de agua y alimentación de 2.000 millones de personas en Asia y África. Varios estudios del proyecto GeoMIP llegaron a conclusiones similares y agregan que el desequilibrio tendría impactos globales, también en el hemisferio Norte.

Otro estudio mostró que la terminación de este proyecto de geoingeniería llevaría a un aumento abrupto de la temperatura, acompañado de más aumento de lluvias y mayor derretimiento de hielo polar. Lo cual significa que si se instalaran esas nubes volcánicas, la terminación significaría colocarnos en una situación peor a la anterior. (Jones *et al*, *Journal of Geophysical Research*, 2013)

¿Por qué entonces insistir en propuestas tan burdamente riesgosas de manipular el clima, un ecosistema global dinámico, insuficientemente conocido y crucial para la sobrevivencia de todas las especies, incluida la nuestra?

Una razón (o sinrazón) es que la geoingeniería funciona bien como excusa para los principales países contaminadores históricos, que ven la posibilidad de paliar los síntomas del caos sin tener que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Así pueden seguir en negociaciones de cambio climático sin compromisos reales de reducción y aumentar sus negocios con mercados de carbono, más aún si se aprueba que técnicas de geoingeniería reciban créditos de carbono.

Pero sobre todo, la geoingeniería es una excelente opción para las transnacionales de los recursos fósiles: petróleo, carbón y gas. Para esta industria, una de las mayores y más poderosas del planeta, con inversiones a nivel global de más de 55 billones de dólares en infraestructura, abandonar la explotación de fuentes de energía fósil no es una opción. Y según ésta, el pico de energía está muy lejos. Todo el tiempo encuentran -o inventan- nuevas reservas y formas de explotarla, como sucede con el *fracking* y la gasificación subterránea de carbón. Ambas con severísimos impactos ambientales, lo cual nunca les ha importado. Incursionan en otras fuentes de energía si ven un buen negocio, pero nunca dejarán las fósiles por su voluntad. Pero saben que el desastre climático crece, y por ello las propuestas de geoingeniería para bajar la temperatura o extraer dióxido de carbono de la atmósfera por medios tecnológicos, sin tener que modificar nada en las emisiones, son muy atractivas y además ¡hasta son una nueva fuente de negocios!

Geoingeniería en el IPCC

En este contexto, es absurdo que el IPCC haya incluido la consideración de la geoingeniería, y que la haya destacado como una posibilidad en su resumen para formuladores de políticas de su Grupo de Trabajo I, sobre ciencia del clima. No le dan carta blanca, y hablan de impactos graves, pero sugieren que el “manejo de la radiación solar” podría bajar la temperatura. Como todos los escenarios que plantean son horribles, el mensaje subliminal parece ser “no habrá acuerdo político para enfrentar el calentamiento, entonces tendremos que usar geoingeniería aunque sea muy peligrosa”. Peor aún, en el informe del Grupo III del IPCC, sobre mitigación, se sugiere repetidamente el uso de algunas técnicas de geoingeniería, como el llamado BECCS por sus siglas en inglés (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono), junto a la promoción de tecnologías devastadoras de la gente y el ambiente como la nuclear.

No hay nada en BECCS que no sea malo: con “bioenergía” se refieren a desiertos verdes de extensos monocultivos de árboles, arbustos y cultivos para agrocombustibles, incineración de desechos etc. Todo ampliamente cuestionado por sus impactos en los precios alimentarios, en las economías, los territorios de campesinos y pueblos, en el ambiente. Y también por su ineficiencia energética y porque generan más gases de efecto invernadero que los que dicen ahorrar. Por eso ahora le adosan el concepto “CCS” -almacenamiento y captura de carbono-: mega instalaciones para absorber dióxido de carbono y enterrarlo en formaciones geológicas y fondo marino. Entre otros riesgos graves, presuponen que lo que entierren, nunca, literalmente nunca, volverá a emerger, como puede ocurrir por movimientos telúricos, por actividades industriales, porque la inyección de gas desestabiliza las capas, etc. Porque si así ocurriera sería un desastre épico.

En los próximos meses hay varias instancias de Naciones Unidas que discutirán estas peligrosas propuestas. El 23 de septiembre, la Cumbre del Clima en Nueva York; en sesión del Convenio de Diversidad Biológica (Corea, 8-19 de octubre) y del Convenio de Cambio Climático (Perú, 1-12 diciembre). A fines de octubre, el IPCC entrega en Dinamarca su 5°. Informe Global de Evaluación. Ante cada una de ellas, habrá también movilización social, incluyendo la llamada “PreCop social” organizada por Venezuela para dar lugar a las voces que se intenta callar en las negociaciones, a las posiciones de la sociedad civil y movimientos sociales. En cada una, es crucial denunciar y oponerse también a la geoingeniería. ◀

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC.

Más información y fuentes en www.etcgroup.org/es/issues/climate-geoengineering

REDD: Un mecanismo controversial

Gerardo Honty

Los orígenes del concepto REDD se remontan al menos a 1990, cuando la empresa energética AES desarrolló un proyecto de conservación de bosque nativo en Guatemala como forma de compensar parte de sus emisiones. Este fue el primero de una serie de proyectos similares que se realizaron durante la década de 1990 principalmente financiados por Estados Unidos, Holanda y Noruega. Costa Rica fue el primer país en vender certificados de carbono por la reducción de emisiones de la deforestación en el año 1997.

La Convención de Cambio Climático discutió largamente la incorporación de la conservación de bosques en los países en desarrollo, particularmente en los largos años de debate en torno al Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, pero finalmente pero no fue aceptada.

Sin embargo, aún sin haber sido aprobado de manera oficial, muchos fondos públicos y privados se destinaron a financiar proyectos “REDD”. El Banco Mundial, el Programa UN-REDD y los mercados voluntarios de carbono han transferido varios miles de millones de dólares en todo el mundo para este tipo de actividades, aún sin aprobación de la Convención.

El Marco de Varsovia

16

Es recién en 2005 que el tema es reintroducido para su discusión en el seno de la Convención bajo el nombre “Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación en los países en desarrollo y los enfoques para estimular la acción” (RED). Luego de varios años de debate, finalmente en diciembre de 2013 la COP 19 aprobó el “Marco de Varsovia para REDD+” que incluye no solo la reducción de emisiones de

la Deforestación, sino también de la Degradación de Bosques, la Conservación, el Manejo Sostenible de los Bosques y la Mejora de los Reservorios de Carbono Forestal (de ahí que su acrónimo haya pasado de “RED” a “REDD+”).

Con esta decisión se puede decir que “oficialmente” el mecanismo REDD+ ha quedado aprobado. Como marco general, el acuerdo establece unos lineamientos básicos pero aún requiere de muchos ajustes y adoptar muchas definiciones que quedaron pendientes.

El objetivo principal de este mecanismo es -y siempre ha sido- la transferencia de recursos de los países “desarrollados” a los países “en vías de desarrollo” para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la destrucción de los bosques (adicionalmente, para la ampliación de la superficie boscosa). Sin embargo, la idea es -y siempre ha sido- bastante resistida porque incluye una serie de componentes que son de difícil resolución. Por ejemplo: cómo se considera a las poblaciones indígenas que habitan los bosques, los riesgos que implica el mercado de carbono, cómo se contabilizan los beneficios asociados a la conservación de los bosques, etc.

Financiamiento

Uno de los temas que aún tiene mucho para resolver es la forma y los medios por los que los fondos van a ser transferidos. Lo acordado puede resumirse de la siguiente manera:

- 1) Los países en desarrollo podrán recibir fondos para actividades REDD+ una vez que puedan demostrar los resultados obteni-

dos. Esto es, cuando pueda comprobarse la efectiva reducción de emisiones (o el aumento o conservación de carbono forestal) luego de haber pasado por todas las etapas de medición, notificación y verificación que se establezcan. Es decir, no habrá financiación anticipada.

- 2) La financiación deberá ser adicional a los fondos ya existentes bajo otros mecanismos y previsible (los países deben saber con anticipación el volumen de fondos con que se puede contar y en qué plazos los pueden obtener).
- 3) Los recursos financieros pueden provenir prácticamente de cualquier fuente: privada (empresas, fundaciones, etc.), pública (recursos nacionales o internacionales de los países), bilaterales (acuerdos entre dos países) o multilaterales (instituciones internacionales como la propia CMNUCC, otras agencias de ONU, Banco Mundial, etc.). Incluso se están manejando fuentes alternativas como una eventual tasa al transporte marítimo y aéreo internacional.

Varios temas quedan todavía a la espera de unas resoluciones más específicas. Particularmente, cuáles son los compromisos de financiamiento que asumen los países desarrollados y cómo estos serán transferidos. También queda por resolverse si el mercado de carbono (venta de certificados de reducción de emisiones) será un mecanismo permitido.

Requisitos

Los países que pretendan recibir apoyo financiero para estas actividades deberán cumplir una serie de requisitos. Entre otros: contar con un Sistema de Vigilancia Forestal; haber establecido sus Niveles de Referencia a partir de los cuales se van a medir sus logros; proporcionar Informes Bienales sobre estas actividades a la Convención y someter sus datos a un proceso de Análisis y Consulta Internacional.

Algunas de las mayores preocupaciones sobre

las actividades REDD+ están relacionadas con los posibles impactos sociales y ambientales negativos que estas puedan tener. Por ejemplo: cómo serán respetados los derechos de las poblaciones indígenas; cómo asegurar la conservación de los bosques naturales en un marco de actividades REDD+ que pueden incluir plantaciones forestales; cómo asegurar que la deforestación que se evita en un bosque o una parte de un bosque no se realiza en otro lugar (fenómeno conocido como “fugas”); etc.

Para intentar lidiar con estos problemas, la Convención ha acordado una serie de “salvaguardias” según las cuales “*deberían*” promoverse y respaldarse, entre otros:

- a) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales teniendo en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
- b) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos indígenas y las comunidades locales;
- c) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y la diversidad biológica, evitando la conversión de bosques naturales en otro tipo de bosque.
- d) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión (permanencia) y reducir el desplazamiento de las emisiones (fugas)

Sin embargo, existen algunas consideraciones sobre las circunstancias nacionales de cada país que podrían debilitar la aplicación de las salvaguardias por ejemplo si estas atentan contra el objetivo de “la reducción de la pobreza”, los “objetivos de desarrollo sostenible” del país, o no le fueron proporcionados los fondos necesarios para ejecutarlas.

Es decir, los países que realicen actividades

de REDD+ deben informar sobre cómo están abordando las salvaguardias, aunque en ningún caso hay exigencias (al menos hasta ahora) que los obligue a abordarlos de una manera particular. Y además, estas pueden ser dejadas de lado si el país entiende que sus “circunstancias nacionales” no se lo permiten.

La importancia de la decisión nacional

Más allá de los acuerdos que finalmente se alcancen en el seno de la Convención (e incluso independientemente de ellos) hay varios temas vinculados a REDD+ que serán de decisión exclusiva de los gobiernos nacionales. De hecho, como se dijo anteriormente, ya existen proyectos REDD en todo el mundo, financiados con recursos internacionales antes de haber tenido ninguna resolución en Naciones Unidas. Algunos de estos temas son los siguientes:

- 1) La participación en actividades de REDD+ que generen unidades transferibles de reducción de emisiones (certificados de carbono transables). El país puede optar por no realizar proyectos bajo esta modalidad y solo focalizarse en aquellas opciones no basadas en el mercado y no hay ninguna decisión que pueda adoptar la CMNUCC que obligue a un país a aceptar esta clase de proyectos si no lo desea.
- 2) La decisión sobre las actividades que serán permitidas. El país puede decidir cuál o cuáles de los cinco tipos de actividades admitidas por REDD+ quiere desarrollar. Por ejemplo puede realizar actividades de Conservación de bosques pero no aceptar las de Manejo Forestal Sostenible.
- 3) Definición de “bosque”. Para Naciones Unidas, la definición de bosque no distingue entre bosque natural y plantación. Sin embargo, cada país puede adoptar la definición de bosque que considere más apropiada para incluir en sus planes. Por ejemplo, podría dejar las plantaciones mono-específicas fuera de esta definición.

4) Las salvaguardias sociales. El Marco de Varsovia deja en manos de los gobiernos nacionales la forma cómo serán consideradas las poblaciones indígenas, los asuntos relativos a la tenencia de la tierra, las cuestiones de género, la participación de las poblaciones locales, etc. Por lo tanto, la forma de gobernanza, los mecanismos de participación y consulta, los repartos de los beneficios y otros temas relacionados, son de exclusiva decisión nacional.

5) Otra decisión que el Marco de Varsovia deja a criterio de cada país es la forma cómo se abordarán en sus planes o estrategias los factores impulsores de la deforestación y la degradación forestal. Esto incluye las actividades de minería, construcción de carreteras, expansión ganadera, entre otros.

Conclusiones

El Marco de Varsovia para REDD+ ha establecido unos lineamientos generales para comenzar a operar pero hay muchos temas de suma importancia que aún están para resolver, como por ejemplo, el volumen de recursos que aportarán los países desarrollados y cómo se canalizarán. Sin embargo es muy importante no perder de vista que varios de los asuntos que son de preocupación para muchos actores de la sociedad civil y gobiernos, serán de decisión exclusiva de los gobiernos nacionales por lo que buena parte de la batalla para evitar los problemas no deseados de REDD+ se darán dentro de cada país. Por ejemplo, la participación en el mercado de carbono (en caso que finalmente esto se apruebe), la forma en que se considera la cuestión indígena, la tenencia de la tierra, las causas subyacentes de la deforestación, etc. Es importante destacar esto, pues muchas veces la atención sobre REDD se ha focalizado en los escenarios internacionales de decisión, lo cual es importante pero, como se ha visto, insuficiente. ☞

Gerardo Honty es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES).

El retorno del movimiento climático de base al escenario internacional

Jim Shultz

El movimiento ciudadano de acción frente a la crisis climática global ha desarrollado con el tiempo una relación de amor-odio con el trabajo en la campaña internacional en general. Durante años, personas en todo el mundo se han unido sobrepasando las fronteras nacionales, para hacer frente a una crisis que no conoce fronteras.

La visión que crearon tenía un atractivo que fue romántico y estratégico al mismo tiempo. El punto culminante de este activismo “un solo planeta, un solo pueblo” fue en 2009, cuando decenas de miles de activistas acudieron a la capital danesa en Copenhague para impulsar acciones en la cumbre anual de la COP (Conferencia de las Partes) de la ONU, con la esperanza de alcanzar un acuerdo global tan serio y real como lo es la propia amenaza climática (algunos activistas llamaron a esta reunión “Hopenhagen”, fusionando el nombre “Copenhagen” con la palabra “Hope”, que en inglés significa esperanza).

Sin embargo, esas esperanzas se estrellaron contra la realidad política de estrechos intereses nacionales inmutables, además de una poderosa resistencia corporativa, asuntos muy complejos y la falta de voluntad política. Muchos activistas climáticos al regresar a sus países, optaron más bien por centrar sus energías en batallas políticas locales, como la lucha contra el oleoducto Keystone XL en los Estados Unidos y los esfuerzos Anti-Fracking en Europa. Cuando se llevó adelante la más reciente negociación de la COP en Varsovia, en diciembre de 2013, el proceso ya había sido completamente ignorado por el gran público.

Pero ahora, en un baile de tres pasos que comienza en las calles de la ciudad de Nueva York en septiembre, el movimiento climático está retornando una vez más al escenario internacional. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien ha hecho del cambio climático una cuestión principal de su mandato, ha llamado a los jefes de Estado del planeta y a otros «líderes mundiales» a una cumbre especial en la «Semana del Clima»¹, destinada a aumentar la presión en busca de una acción internacional coordinada.

Organizaciones de activistas climáticos en los EE.UU. se han estado movilizandodurante meses para aprovechar la oportunidad de la cumbre que se llevará a cabo allí, con planes para una masiva marcha por las calles de Manhattan el 21 de septiembre. En diciembre, esta energía renovada para la acción internacional se desplazará hacia el sur, hasta Perú, donde tendrán lugar las negociaciones de la COP bajo la sombra política del deshielo de los glaciares andinos. Luego, en diciembre del próximo año las negociaciones de la COP se trasladarán a París, para lo que supuestamente es la fecha límite para un nuevo acuerdo internacional sobre el clima. Activistas europeos ya se están reuniendo para organizar allí una movilización en las calles, para igualar o superar la multitud esperada en Nueva York este mes de septiembre.

¿Cómo cambiar la ecuación política?

En momentos en que el movimiento climático va dando pasos y avanzando una vez más al es-

1 <http://www.climateweeknyc.org/>

cenario de la política internacional, no le faltan demandas y propuestas. Los grupos climáticos pueden ofrecer una diversidad de ambiciosos y apasionados planes sobre cómo reducir el uso de combustibles fósiles por parte de la humanidad, proteger los bosques del mundo y trasladar dinero de los países ricos que han causado esta crisis climática, a los más pobres que están menos equipados para hacer frente a lo que viene.

Pero saber lo que se quiere y saber cómo cambiar la ecuación política para hacerlo posible, son dos cosas diferentes.

El Centro para la Democracia entrevistó recientemente a más de 40 activistas climáticos de los cinco continentes para recabar sus puntos de vista sobre la mejor manera de usar la Cumbre de Lima y las otras reuniones mundiales, como una oportunidad para cambiar los vientos políticos en torno a la crisis climática y hacer posible la acción real. Lo que escuchamos de estas personas, que van desde activistas indígenas locales, hasta el personal de ONG's muy conocidas, son tres hilos muy importantes de sabiduría colectiva.

En primer lugar, cambiar la narrativa mundial sobre la crisis climática. Durante una década, los activistas climáticos han estado brincando de un discurso a otro para hablar de la crisis. Hemos oído acerca de los osos polares y el aumento del nivel del mar, tormentas monstruosas y partes por millón de carbono en la atmósfera, nada de ello lo suficientemente conectado con la vida cotidiana de la gente como para ganar una fuerza de arrastre suficiente y duradera.

Pero hay lecciones desde el movimiento de base sobre cómo hacerlo mejor. En California, los activistas climáticos lucharon con éxito contra el asalto político de los hermanos Koch² (que financian el escepticismo respecto al cambio climático) al hablar de las plantas locales de combustibles fósiles y su conexión con el asma en los niños. En América del Sur, la crisis tiene que ver con el agua: su desaparición en algunos lugares está provocando sequías y desplazamientos, y su

excesiva presencia en otros lugares está causando inundaciones y destrucción. En Asia y África, la gente habla acerca del papel del clima en el empeoramiento de la crisis alimentaria.

El hilo común en los mensajes que están ganando apoyo es hablar de la realidad local y ligar la crisis climática con los problemas reales de la vida, de la supervivencia. Implica hablar a la gente del planeta degradado y cada vez más peligroso que les estamos dejando a nuestros hijos y a los suyos. Algo que es tan importante como el mensaje, es la autoridad moral de quien proviene. “No podemos hablar de los impactos, a menos que el principal mensaje provenga de las comunidades afectadas”, dice Juan Carlos Soriano, un activista peruano de 350.org.

En segundo lugar, usar esta trilogía de acciones globales para construir poder a largo plazo en el movimiento climático. Lograr una acción real frente al clima no tiene que ver solamente con la concientización, sino que se trata de construir poder político en el movimiento climático y de cómo hacerlo.

En Nueva York y París, la atención se centrará en movilizar multitudes en las calles, con la esperanza de convencer a los gobiernos que seguir ignorando la creciente demanda de acción implica riesgos para ellos. “Lo que más necesitamos hacer como movimiento es animar la conversación y construir poder, no presionar a los líderes mundiales”, señala Sean Sweeney, del Global Labor Institute.

En América Latina, África y Asia ese poder ciudadano reside en los movimientos de base de larga data vinculados a los derechos indígenas, derechos territoriales, recursos naturales y otras batallas que ahora se ven afectados por el cambio climático. Para la COP en Lima, ubicada entre dos eventos de más alto perfil dominados por el Norte, en Nueva York y París, los activistas con los que hablamos dijeron que este evento debe resaltar como la “COP del Sur” y establecer el vínculo entre la crisis climática y estos movimientos.

2 <http://bit.ly/1cEtm0K>

“Las luchas locales parecen estar en espacios compartimentados que no se conectan a este gran problema que afecta a todo, absolutamente a todo. Uno de los retos consiste en conectar las luchas y demandas locales con el activismo en contra del cambio climático”, dice Elizabeth Peredo Beltrán, una líder climática renombrada en Bolivia.

En tercer lugar, enfrentar directamente a los poderes y fuerzas que bloquean acciones serias sobre la crisis climática. Las empresas de combustibles fósiles, la agroindustria internacional, los fabricantes de automóviles y otros intereses corporativos tienen una gran participación en las negociaciones internacionales sobre el clima y han utilizado su poder político para incrustarse en el proceso de la COP de la ONU.

Durante la reunión en Varsovia el año pasado, el Observatorio Europeo de Corporaciones documentó todo tipo de técnicas utilizadas por estas empresas para convertirse en patrocinadores oficiales de las negociaciones mundiales sobre el clima, de la misma forma en que podrían convertirse en patrocinadores de los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo. Las corporaciones dotan de todo a los negociadores gubernamentales, desde coches y conductores gratuitos hasta tazas para beber con sus logos estampados, todo el tiempo empujando sus agendas hacia temas tales como la tecnología de captura de carbono y los mercados de carbono impulsados por las corporaciones.

Los activistas dicen que es urgente centrar la atención en esta captura corporativa de las negociaciones y en las falsas soluciones que las corporaciones están fomentando. “Tenemos que ir con una estrategia ofensiva y comunicar el mensaje de que las negociaciones se están enfocando en cuestiones erróneas; las soluciones reales pasan por rediseñar la economía”, dice Nathan Thanki del grupo Earth in Brackets.

Estrategia más táctica


Sun Tzu escribió en *El arte de la Guerra* que “la estrategia sin táctica es el más lento ca-

mino a la victoria, y la táctica sin estrategia es el ruido antes de la derrota”. Es una buena noticia en el mundo del activismo climático que los movimientos y organizaciones estén retomando la demanda de una acción seria en el escenario internacional.

Si bien es bastante improbable que países como EE.UU., China, India y otros, acepten atar sus políticas internas a un acuerdo global, la acción internacional puede aumentar la presión sobre estos gobiernos para que tomen medidas. Al igual que con todos los movimientos ciudadanos exitosos, ello comienza con la construcción de una base sólida, comprometida y movilizadora entre quienes ya están comprometidos con la acción.

Pero el movimiento climático también debe ganar el apoyo de los sectores ciudadanos que aún no está comprometidos ni convencidos, bajo una agenda común de acciones necesarias.

El camino a través de Nueva York, Lima y París ofrece la oportunidad de hacerlo, siempre que hablemos de la crisis de una manera que conecte con la gente, que usemos todas las oportunidades para construir el poder y no sólo para desahogarnos, y que desenmascaremos, desafiemos y socavemos las fuerzas más grandes que se interpongan en el camino.³

Con tanto en juego para las generaciones que vendrán después de nosotros en este planeta, es esencial que la próxima ronda global de acción climática logre resultados, y no termine siendo “el ruido antes de la derrota”. (*Tra-ducción Aldo Orellana López*). 

Jim Shultz es fundador y director ejecutivo del Centro para la Democracia (<https://twitter.com/DemocracyCenter>) y vive en Cochabamba, Bolivia. Este artículo se publicó originalmente en inglés en *YES! Magazine* <http://bit.ly/1oD4dmU>

³ Ver: “Estrategias de Movimiento para Mover Montañas: Conversaciones con activistas de todo el mundo sobre cómo usar la COP de América Latina para construir acción ciudadana sobre el clima” <http://bit.ly/1paSQLq>

Entrevista con Meena Raman

Justicia climática: Concientizar, movilizar, cabildear

ALAI

Si bien el cambio climático es uno de los más graves problemas globales que enfrenta la humanidad en la actualidad, con enormes implicaciones en diversos frentes para nuestro futuro común, llama la atención que esta problemática aparece en la esfera pública apenas cuando se producen catástrofes. Mientras tanto, las reuniones de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención del Cambio Climático (cuya próxima edición se realizará en Lima, en diciembre), que constituyen el principal foro internacional sobre esta temática, son vistas generalmente como un asunto restringido a autoridades especializadas y expertos (incluyendo algunos participantes de la sociedad civil).

Sobre estos temas, realizamos un intercambio (por escrito) con Meenakshi Raman, abogada en temas de interés público y coordinadora del programa sobre cambio climático de la Red del Tercer Mundo en Malasia. Meena comenzó por situar lo que considera son los principales retos para los actores sociales que buscan colocar el cambio climático en la agenda pública, con miras a construir un movimiento capaz de conseguir que las negociaciones internacionales desemboquen en las decisiones políticas que la situación exige.

MR: Uno de los principales desafíos es concientizar a la gente respecto a cómo las negociaciones internacionales tienen implicaciones para las acciones frente al cambio climático en el terreno, ya que toda la acción local nunca puede ser suficiente. Cómo otros países actúan tiene importancia en relación con las

emisiones a nivel mundial, porque impacta en el clima, y eso a su vez exige respuestas a nivel local y nacional. Por lo tanto, es necesaria la cooperación internacional; y esto está incorporado en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), tratado que se acordó en 1992.

Este es el único marco legal global que impone a todos los gobiernos obligaciones de tomar medidas, y según el cual los países desarrollados deben liderar la reducción de las emisiones y la provisión de recursos financieros y tecnológicos a los países en desarrollo, para que éstos puedan realizar acciones para enfrentar el cambio climático en el plano interno. Así es como opera el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (RCPD) y la equidad. Estas disposiciones reflejan la responsabilidad histórica de los países desarrollados que, desde la revolución industrial, son los que más han emitido los gases de efecto invernadero actualmente presentes en la atmósfera.

Los países desarrollados están tratando de debilitar la Convención y de desplazar hacia los países en desarrollo gran parte de sus responsabilidades para enfrentar el cambio climático, con miras al nuevo acuerdo que se celebrará en París el próximo año. Es importante que la sociedad civil y los movimientos sociales impidan que esto ocurra, de lo contrario ya no existirá un tratado equitativo para la acción global en materia ambiental.

Los países desarrollados, encabezados por Es-

tados Unidos y sus aliados, no quieren respetar el trato diferenciado entre los países desarrollados y en desarrollo y quieren un régimen que aplica las reglas de manera uniforme a todos los países, independientemente de las diferencias entre ellos. También pretenden que todos los países se comprometan a fijar sus tasas de reducción post 2020, sin reconocer la necesidad del apoyo financiero y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, lo cual es contrario a la Convención. EE.UU. y sus aliados quieren que los países asuman compromisos de acuerdo con sus circunstancias nacionales, sin reconocer que tal sistema de compromiso y revisión, en ausencia de la fijación de objetivos globales para los países desarrollados, conllevaría probablemente al mundo a una elevación de temperatura promedio más allá de los 2 grados centígrados, pudiendo llegar incluso a 4 ó 5 grados C de aumento.

Una de las propuestas que algunos gobiernos de países en desarrollo y grupos de la sociedad civil han desarrollado es la necesidad de compartir de manera equitativa el espacio de carbono que aún resta en la atmósfera, teniendo en cuenta las emisiones históricas de cada país desde la época de la revolución industrial; estas asignaciones se basarían en factores de población y de la riqueza relativa con que cada país cuenta para poder tomar medidas. Si se apuntara a limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados C, significaría que queda por asignar un cierto volumen «muy pequeño» que las emisiones de carbono no deben exceder.

Los países desarrollados han emitido muchos gases de efecto invernadero históricamente, mientras acumulaban su riqueza, en un mundo sin restricciones y basado en los combustibles fósiles. Ellos han acumulado una deuda de carbono, lo que significa que han utilizado el espacio atmosférico de los países en desarrollo. Esta deuda de carbono tiene que ser pagada mediante recursos financieros hacia los países en desarrollo. También deberán transformar radicalmente sus propias economías y estilos de vida para evitar mayores emisiones, a la mayor brevedad.

En un planeta que necesita restringir el carbono, los países en desarrollo no pueden replicar los mismos caminos de alta emisión; sin embargo, para que ellos puedan transformarse a sociedades bajas en carbono y responder a los impactos del clima, requieren de recursos financieros masivos y de la transferencia de tecnologías desde los países desarrollados. Ello se debe a que muchos países en desarrollo ya se enfrentan al reto de satisfacer las necesidades básicas de su población con recursos limitados, así como de erradicar la pobreza y las desigualdades entre su población.

La única manera para hacer avanzar este tipo de demandas, es que los movimientos sociales y la sociedad civil insistan en la implementación de las obligaciones existentes en virtud de la CMNUCC y reforzarlas con otras acciones, a la vez que evitar cualquier retroceso frente a las obligaciones internacionales.

Para que esto suceda, se requiere impulsar movilizaciones en las capitales para exigir que los gobiernos rindan cuentas respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales, especialmente en los países desarrollados. Implica también desarrollar acciones nacionales sobre el clima en todos los países.

En los países desarrollados existe la necesidad de ejercer una mayor presión para aumentar la transferencia a los países en desarrollo de recursos financieros y tecnologías ambientalmente amigables, para que puedan defenderse del cambio climático. No obstante la creación en 2011 del Fondo Verde para el Clima (FVC) -constituido en el marco de la CMNUCC para que los países en desarrollo puedan llevar a cabo acciones de mitigación y adaptación climática-, este Fondo aún no se ha capitalizado. En Cancún, México, en 2010, los gobiernos acordaron que al menos US\$100 mil millones por año serían movilizados hasta 2020. Esto aún no se concreta. Es vital que estos recursos sean transferidos con urgencia, a fin de permitir a los países en desarrollo, no sólo satisfacer sus necesidades de adaptación, sino también llevar a cabo acciones para la reducción de emisiones.

Si dicha transferencia de recursos no llega rápidamente, entonces los pocos recursos nacionales con que cuentan los países en desarrollo deberán asignarse para la adaptación y para enfrentar las pérdidas resultantes de catástrofes naturales o inducidas por el clima. Esto implicaría sacrificar la satisfacción de sus otras necesidades sociales y básicas, como alimentos, refugio, vivienda, salud y educación para los pobres.

Además, desde que se acordó en Cancún, en 2010, establecer un Mecanismo Tecnológico para facilitar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, muy poco se ha concretado en cuanto a la entrega efectiva de la transferencia de tecnologías ecológicamente amigables. Por lo tanto, es vital que los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) presionen a los gobiernos de los países desarrollados para que cumplan con sus obligaciones.

- *¿Qué fuerzas sociales están activas hasta ahora en este movimiento? ¿Cuál es su capacidad de movilización?*

Hay un movimiento llamado Campaña Global para Exigir Justicia Climática (GCDJC por sus siglas en inglés) y una coalición de OSC y movimientos llamado el Grupo de Equidad y Ambición (EAG).

El GCDJC ha estado movilizando acciones en todo el mundo con la esperanza de contribuir a la generación de las condiciones políticas necesarias para hacer realidad la justicia climática. Sus objetivos son:

- Construir y ejercer el poder de la acción colectiva, de diferentes formas y en diversos frentes y escenarios, a una escala nunca antes vista;
- Desarrollar la capacidad de coordinar movilizaciones a nivel mundial durante los momentos políticos críticos; aumentar progresivamente el número de personas movilizadas, ampliar el número de países y

ciudades participantes, elevar el alcance, la intensidad y la audacia de sus acciones, desarrollar la fuerza y el poder para evitar la catástrofe planetaria.¹

La otra coalición, la EAG, está mucho más orientada a las políticas; organiza actividades de lobby y cabildeo dentro del espacio de la CMNUCC. Trabaja en estrecha colaboración con la GCDJC. La Red del Tercer Mundo participa en ambas agrupaciones.

- *¿Cuáles son los principales debates que se realizan entre actores sociales en torno al cambio climático? ¿Cuáles son las principales alternativas que estos actores sociales promueven?*

Como he mencionado, los principales puntos que se debaten se refieren a: un enfoque equitativo para compartir el espacio atmosférico restante; el incremento de recursos financieros nuevos, adicionales y predecibles para el FVC; las falsas soluciones impulsadas principalmente por los países desarrollados, como la geoingeniería, nuevos mecanismos de mercado que promueven el comercio de carbono, la energía nuclear, las represas hidroeléctricas a gran escala, la captura y almacenamiento de carbono, etc.

- *¿Cuáles serán los temas más importantes en juego en las negociaciones oficiales de la COP20 en Lima? ¿Cómo se están organizando los actores sociales en torno a estos temas?*

Uno de los temas más importantes será la de garantizar que el FVC se capitalice suficientemente, con al menos US\$ 15 mil millones de dólares para empezar, como lo ha planteado el Grupo de los 77 + China. Esa será una de las principales pruebas para tener o no alguna confianza de que los países desarrollados son serios respecto al cumplimiento de sus obligaciones.

1 Ver: <http://climatejusticecampaign.org/about>

Otro tema se refiere a si los países desarrollados aumentarán sus metas de reducción de emisiones, siendo que en la actualidad, sus compromisos son muy modestos. En 2012, en Doha, Qatar, los países desarrollados que son parte del Protocolo de Kioto (como la Unión Europea, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Suiza y otros, pero que no incluyen a EE.UU., Canadá, Japón) acordaron volver a revisar los compromisos que hicieron para un segundo período, de 2013 a 2020. Las emisiones totales que habían acordado representaban una reducción de sólo el 17% hasta 2020 para los países desarrollados, en comparación con los niveles de 1990. Esto fue visto por los países en desarrollo como una cifra muy baja, dado que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en su cuarto informe de evaluación, hace referencia a un rango de entre 25 y 40% de reducción de emisiones para 2020 respecto a los niveles de 1990 para los países desarrollados. Se acordó en Doha que los países desarrollados partes del Protocolo de Kioto (PK) volverían a examinar su nivel de ambición² hasta el 2014. Por lo tanto, queda por verse si esta revisión se realizará en Lima.

Se instó a los países desarrollados que no están en el Protocolo de Kioto, como Estados Unidos, Canadá y Japón, a hacer esfuerzos en la reducción de emisiones, comparables con los del Protocolo de Kioto. No es nada probable que estos países eleven su nivel de ambición, dado que tanto Japón como Canadá han anunciado que ¡incluso aumentarán sus niveles de emisión en comparación a lo que habían anunciado previamente en Cancún! En el caso de EE.UU., el compromiso de reducción de emisiones que plantea es muy bajo: equivale a una reducción de sólo alrededor del 3% hasta 2020, con respecto a los niveles de 1990. Para el mayor emisor histórico del mundo, esto significa hacer demasiado poco y demasiado tarde.

2 NdT: "Ambición" se refiere a la voluntad colectiva de fijar y alcanzar las metas de recortes de emisiones.

Es en este contexto que los elementos para un nuevo acuerdo que tendrá efecto post 2020 deben concretarse en Lima, con la elaboración de un texto borrador de negociación que debe estar listo a principios del próximo año.

Si la ambición pre-2020 es muy baja, tanto en términos de la reducción de emisiones de los países desarrollados como de la falta de recursos en el marco del FVC, la base para el acuerdo de 2015 quedará seriamente comprometida. Si los países desarrollados no demuestran liderazgo, los países en desarrollo serán reacios a emprender una acción más ambiciosa. Por lo tanto, se desencadenaría una carrera al precipicio en este ámbito.

En relación con el acuerdo de 2015 que se debe concluir en París, y que entrará en vigencia después de 2020, los países desarrollados tratan de debilitar la aplicación de los principios de la Convención, de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas. Para muchos países en desarrollo, el tema más importante es si -y cómo- estos principios se van a reflejar y aplicar en el nuevo acuerdo. Argumentan que los principios, las disposiciones y los anexos (que diferencian entre países desarrollados y en desarrollo) del Convenio deben seguir aplicándose en el nuevo acuerdo. Los países desarrollados, en cambio, contestan que esto no debería ser el caso, dado que "el mundo ha cambiado desde 1992" (cuando la Convención se acordó). Consideran que hay países que ya no pueden ser considerados como "en desarrollo" y que ya no se puede establecer una diferenciación entre los países desarrollados y en desarrollo. Esta temática será la más importante y polémica en Lima y París. Una pelea en torno a qué es un país en desarrollo y qué no lo es, en esta etapa, pondría gravemente en peligro cualquier acuerdo y provocaría un caos en el actual régimen internacional.

- *En ausencia del necesario debate público informado, las posiciones adoptadas por los ambientalistas, si bien pueden*

pasa a la página 29

Aportes de la CLOC-Vía Campesina:

La agricultura campesina indígena en las negociaciones de la COP20

CNA-Perú

Estamos próximos a la celebración de la vigésima Conferencia de las Partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), donde se intentará lograr compromisos significativos frente a la crisis climática en el mundo. Desde las organizaciones campesinas esperamos que en estas negociaciones la agricultura familiar campesina indígena no sea, como en muchas cumbres anteriores, la gran olvidada, ya que los impactos del cambio climático sobre nuestros sistemas agroalimentarios van en aumento, debido, entre otras causas, al acaparamiento de tierras en unas pocas manos, los modelos de producción a gran escala, la privatización de los recursos naturales, los modelos extractivistas impuestos en la región, además de todos los insumos relacionados con el ciclo productivo.

Es un hecho que las poblaciones que más sufrirán sus consecuencias serán las más empobrecidas y vulnerables, donde se incluyen de forma concreta nuestras comunidades indígenas y campesinas. Es más, las consecuencias del cambio climático y sus impactos ya se están manifestando sobre los recursos naturales, su disponibilidad y acceso, y concretamente sobre la agricultura, base del sustento de la economía y de las formas de vida de los pueblos indígenas, originarios y campesinos.

Se sabe que las familias campesinas indígenas que se dedican a la agricultura familiar son las que más ayuda necesitan para adaptarse al cambio climático, y son pocos los países latinoamericanos que cuentan con estrategias de adaptación que prioricen la agricultura

familiar. En el contexto regional, los actuales gobiernos vienen implementando políticas de crecimiento económico con inclusión social, bajo modelos que priorizan formas que han demostrado ser poco sostenibles y de alta contribución al cambio climático, como son la agro-exportación, la explotación de los recursos y los megaproyectos. Además, estas políticas de inclusión dirigidas a las poblaciones en alto riesgo y vulnerabilidad, promueven modelos de desarrollo asistencialista que hacen dependientes a las comunidades, no favoreciendo la cosmovisión y decisión de las poblaciones indígenas y campesinas, como agentes de su propio desarrollo.

En este sentido, esas políticas están teniendo y van a tener a futuro, un efecto sobre los derechos de las poblaciones más vulnerables, las cuales van a estar sometidas a mayores riesgos. Además, esos efectos tendrán unos costes sociales, culturales y económicos, aparte de los ambientales, que no están siendo valorados, y que tendrán que ser asumidos por ese mismo Estado que no se está preocupando de prevenirlo. Por lo tanto, el problema no es solo ambiental, sino que es complejo en la medida que afecta a las personas y sus formas de vida, y debería abordarse contemplando toda esa complejidad.

La respuesta de las organizaciones campesinas indígenas

Las organizaciones que integramos la CLOC-VC planteamos una solución holística que debe

abarcas aspectos estructurales en lo que se debería considerar la raíz del problema: el modelo y organización de la producción, distribución y consumo de alimentos a nivel mundial apoyado por políticas nacionales e internacionales y que puede caracterizarse como industrial, deslocalizado y controlado por unas pocas corporaciones agroalimentarias que, además, apuestan por los cultivos transgénicos como nueva solución al hambre y las adversidades climáticas.

Otro aspecto conflictivo que debemos enfrentar es el referido a la producción de agrocombustibles. Aunque empieza a haber cautela en la promoción de su uso como medida para combatir el cambio climático, como forma de evitar el consumo de energía fósil, cada vez son más los expertos que alertan de los impactos relacionados a las emisiones asociadas a los cambios de uso del suelo, además de la grave afectación que está sufriendo el uso de la tierra para la producción de cultivos dirigidos al consumo humano ante la competencia a gran escala de estos monocultivos agroindustriales.

En este sentido, como campesinos y campesinas, apostamos por modelos alternativos de desarrollo, donde la Soberanía Alimentaria es nuestro eje central de acción. Entendemos la Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos a definir nuestras propias políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación adecuada para toda la población, con base a la pequeña y mediana producción familiar, respetando nuestras culturas y diversidad de formas campesinas, pesqueras e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de nuestros territorios, en los cuales la mujer desarrolla un papel fundamental.

Destacamos nuestra clara oposición a las grandes corporaciones agroalimentarias y exigimos su desmantelamiento completo. Estas corporaciones ocupan una posición hegemónica dentro del sistema agroalimentario mundial y sus prácticas perjudican gravemente a la agricultura indígena y campesina. Además, representan

el motor del actual sistema agroalimentario sustentado en producción de alimentos de baja calidad, en la destrucción del medio ambiente (monocultivos), en la deforestación acelerada (ampliación de la frontera agrícola) y en el transporte de alimentos (alimentos kilométricos), siendo vulnerados nuestros derechos fundamentales como el acceso a nuestros propios territorios o el control de los mercados locales.

Proponemos un modelo de agricultura familiar campesina indígena descentralizada y basada en principios de sostenibilidad, de producción y consumo local de alimentos. Dentro de este modelo, los pueblos somos los principales protagonistas, reconociéndose nuestro papel histórico de productoras y productores de alimentos. Para ello hay que visibilizar las prácticas y saberes ancestrales que nuestras comunidades han mantenido a lo largo de siglos, promoviendo el uso de tecnologías culturalmente apropiadas que fortalezcan todo nuestro patrimonio y sostenibilidad.

También necesitamos que se garantice el libre acceso a los recursos necesarios para cultivar y distribuir alimentos, como territorio, semillas, tecnología o crédito. Es por ello que rechazamos la privatización y la mercantilización de los alimentos, servicios básicos públicos, conocimientos, territorios, agua, semillas, ganado y el patrimonio natural.

Rechazamos el actual modelo basado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, el cual impide a los países tener su propio sistema de producción y distribución de alimentos que priorice los intereses de la población local. Proponemos transparencia y precios justos, tanto para los consumidores como para los productores, y reclamamos políticas y posicionamientos públicos que favorezcan la agricultura familiar de producción local, desarrollando mecanismos que protejan la producción nacional y local frente a importaciones de alimentos provenientes de fuera.

También proponemos que las políticas energéticas sean descentralizadas y sostenibles fren-

te al actual modelo extractivo y de producción de agrocombustibles a gran escala, los cuales generan grandes impactos negativos en nuestros derechos colectivos acelerando el calentamiento global.

Soluciones al cambio climático

La agricultura a pequeña escala es una solución ante la crisis alimentaria global, ya que mantiene sistemas productivos locales, diversificados y sostenibles, mejorando la calidad de vida en las zonas rurales y urbanas y mitigando el cambio climático al mantener y mejorar la capacidad de nuestros territorios como sumidero de carbono. La transición a un modelo de agricultura campesina indígena, con sus técnicas tradicionales de manejo de suelos, devolverían millones de toneladas de carbono al suelo mejorando su fertilidad, de modo que se disminuiría la necesidad de insumos, recuperando materia orgánica como para contrarrestar entre el 20 y el 25% de las emisiones:

Una relocalización de la agricultura que promueva el consumo de alimentos frescos comprados en mercados locales ahorraría entre un 10 y un 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero; ya que habría una disminución del procesamiento de alimentos, no siendo necesario además el transporte de alimentos alrededor del mundo y disminuyendo los procesos de conservación de alimentos (refrigeración) así como el uso de envases de plástico.

Volver a reintegrar la producción animal con la producción de cultivos, supondría ahorrar entre el 5 y el 9% debido a aspectos como la eliminación de los cerros de estiércol y las lagunas de purines característicos de la producción intensiva o el transporte de alimentos para piensos alrededor de todo el mundo.

Frenar la expansión de los monocultivos y transformarlos en sistemas agroforestales diversificados para detener el desmonte y la deforestación, compensaría entre un 15 y un 18% de las emisiones. Sin embargo, esto tendría que suponer una disminución en el consumo de

productos agrícolas no alimenticios, en el consumo de carne y el cambio del modelo energético para implementar formas descentralizadas de producción de energía.

Un cambio radical de las políticas agrarias, alimentarias y energéticas, priorizando la soberanía alimentaria, reduciría entre la mitad y las tres cuartas partes de las actuales emisiones globales de gases de efecto invernadero. Si estas acciones se uniesen a otras medidas de ahorro y disminución en otros sectores económicos, se podría conseguir la meta cero de emisiones e incluso reducir las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero.

Por ello, las negociaciones internacionales sobre cambio climático no deben quedarse en la mera reducción de gases de efecto invernadero y el estudio del problema desde un enfoque de recursos naturales. Las negociaciones deben comprender medidas financieras, de cambio en los patrones de producción y consumo, entendiendo la adaptación como un proceso de transformación hacia formas de vida equitativas y sostenibles, dando uso a fondos económicos controlados de forma soberana y restableciendo la deuda con nuestros pueblos indígenas y campesinos, siendo los más afectados y los menos contaminantes.

Como organizaciones campesinas e indígenas, promovemos modelos integrales de desarrollo del Buen Vivir, que contemplan acciones y propuestas a todos los niveles, local, regional y mundial. La crisis climática, como ya hemos afirmado, no es solo un problema ambiental, sino social, cultural y económico que exige un cambio de modelo más respetuoso con la sostenibilidad de la vida y el respeto a los derechos básicos de todos los seres humanos. Y en el marco de la próxima Conferencia, éste será nuestro reto. ◀

Artículo elaborado por el Equipo Técnico de la Confederación Nacional Agraria del Perú, con aportes desde las organizaciones de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo - Vía Campesina.

Entrevista con Meena Raman...
viene de la página 25

estar justificadas, a menudo son percibidas como extremistas o fuera de contacto con la realidad cotidiana de las personas. ¿Cómo abordar esta desconexión?

Como se ha dicho antes, hay mucho por hacer para que la gente tome conciencia de por qué es importante participar en el proceso internacional y cómo puede aportar para las campañas a nivel nacional. Para ello, agrupaciones como el GCDCJ y la EAG han emprendido esfuerzos por explicar las negociaciones internacionales y vincularlas a los problemas cotidianos de la gente en el terreno, como la

energía, los alimentos, las falsas soluciones y las personas afectadas por el cambio climático. De esta manera, las personas serán capaces de participar en función de sus intereses particulares, a la vez que luchar contra enfoques y soluciones falsas y plantear soluciones adecuadas, desde el punto de vista del pueblo común, sus derechos y sus luchas. Es cuando vinculamos el discurso internacional sobre el clima a las luchas de la gente común, que se puede abordar la desconexión. De esta manera, la gente puede entender que, siendo que las acciones locales y nacionales son necesarias, por sí solas no serán suficientes para hacer frente a un problema mundial como el cambio climático, que también requiere la cooperación y la acción internacional. (Traducción ALAI). <

www.alainet.org

- realidad regional actualizada diariamente
- dinámicas sociales
- noticias, opinión y análisis
- más de 77 mil documentos clasificados
- búsquedas por tema, autor, fecha, país, palabra





AMERICA LATINA *en movimiento*

revista mensual

ACTUALIDAD Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO

- Realidad Regional
- Procesos Sociales
- Problemáticas Contemporáneas

Un esfuerzo conjunto de analistas y pensadores destacados, organizaciones sociales y ciudadanas, escritores y comunicadores comprometidos con las causas sociales.

Fuente de información imprescindible para líderes de opinión, dirigentes sociales, activistas políticos, centros de estudios y formación, periodistas y medios de comunicación, organismos de desarrollo...

¡SUSCRIBETE!

Tu aporte garantiza la continuidad y calidad de nuestra labor informativa
info@alainet.org • www.alainet.org/revista_phtml

ALAI • casilla 17-12-877, Quito, Ecuador • email: info@alainet.org • www.alainet.org